

CIENCIAS SOCIALES EN ACCIÓN

RESPUESTAS FRENTE AL COVID-19
DESDE EL NORTE DE MÉXICO



El Colegio
de la Frontera
Norte

CIENCIAS SOCIALES EN ACCIÓN

RESPUESTAS FRENTE AL COVID-19 DESDE EL NORTE DE MÉXICO

Oscar F. Contreras
(coordinador)

Ciencias sociales en acción : respuesta frente al COVID-19 desde el norte de México / Oscar F. Contreras, coordinador. — Tijuana : El Colegio de la Frontera Norte, 2021.

24.8 MB

ISBN: 978-607-479-XXX-X

1. Seguridad pública — América Latina. 2. Violencia — Aspectos sociales — América Latina. 3. Violencia — Aspectos políticos — América Latina. I. Valenzuela Mendoza, Rafael Enrique. II. Sumano Rodríguez, José Andrés.

HV 7434.L29 C6 2021

Primera edición, 8 de febrero de 2021

D. R. © 2021 El Colegio de la Frontera Norte, A. C.

Carretera escénica Tijuana-Ensenada km 18.5

San Antonio del Mar, 22560

Tijuana, Baja California, México

www.colef.mx

ISBN: 978-607-479-XXX-X

Coordinación editorial: Érika Moreno Páez

Corrección y formación: Luis Miguel Villa Aguirre, Efrén Callejas y Diana Bastida

Diseño de cubierta: Bredna Lago

Imagen de cubierta: Freepik

Hecho en México/*Made in Mexico*

Introducción. Las ciencias sociales frente a la pandemia de COVID-19

Oscar F. Contreras

El 31 de diciembre de 2019, la autoridad sanitaria de la ciudad china de Wuhan hizo pública la aparición de varios casos de una extraña neumonía. Dos semanas después se registró el primer contagio fuera de China y, dos meses después, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró formalmente la existencia de una pandemia global, cuando se habían registrado más de 118 0000 casos en 114 países. Como es bien sabido, el nuevo virus, identificado como SARS-CoV-2, y la enfermedad asociada, COVID-19, se propagaron con extrema rapidez en todo el mundo. De acuerdo con el sistema de monitoreo de la Universidad Johns Hopkins, el 31 de diciembre de 2020, un año después de la primera noticia sobre el virus, se habían registrado más de 83 millones de contagios y 1.8 millones de muertes (Johns Hopkins University of Medicine, 2020).

Pero la respuesta científica se produjo también con extraordinaria rapidez. El 12 de enero de 2020 se publicó la secuencia genética del nuevo coronavirus y, desde los primeros días, numerosos centros de investigación, privados y públicos, emprendieron las investigaciones para elaborar una vacuna contra el COVID-19. Tan sólo 12 meses después de los primeros casos, el 31 de diciembre de 2020, había 64 vacunas en diferentes etapas de pruebas clínicas, de las cuales 19 estaban en la fase final, seis habían empezado a aplicarse de forma limitada y tres estaban siendo aplicadas de forma masiva (Zimmer, Corum & Wee,

2020).

Independientemente del enorme esfuerzo y la complejidad logística que representará inmunizar a una parte sustancial de la población mundial, la disponibilidad de varias vacunas para su uso masivo al inicio de 2021 constituye un formidable logro científico. La revista *Science*, un referente mundial en temas científicos, destacaba a fines de 2020 no sólo la velocidad del resultado, sino, además, el alto nivel de eficacia de las vacunas que recién concluían las pruebas clínicas:

Noventa y cinco por ciento. Eso es más de lo que casi nadie se atrevía a esperar. (Las vacunas contra la influenza, en un buen año, alcanzaron el 60% de efectividad). Una confluencia de fuerzas impulsó a la ciencia desde cero hasta una vacuna COVID-19 a una velocidad revolucionaria. Nunca antes los investigadores habían desarrollado tan rápidamente tantas vacunas experimentales contra el mismo enemigo. Nunca antes tantos competidores habían colaborado de forma tan abierta y frecuente. [...] Y nunca antes los gobiernos, la industria, el mundo académico y las organizaciones sin fines de lucro habían invertido tanto dinero, músculo y cerebro en la misma enfermedad infecciosa en tan poco tiempo (Cohen, 2020).

Diversas disciplinas como la bioquímica, inmunología, virología, microbiología, biología molecular e ingeniería genética, entre otras, contribuyeron de manera decisiva a este logro sin precedentes. Sin embargo, en la medida en que la pandemia trastocó el funcionamiento de la economía y de la sociedad de manera global y profunda, muchos otros esfuerzos científicos fueron desplegados en muy diversas áreas del conocimiento para hacer frente a la crisis. La contribución de las ciencias sociales en estas tareas ha sido sin duda menos visible, pero ha aportado valiosos conocimientos para discernir el alcance y la complejidad de la pandemia, y para hacer frente a sus impactos. La infección por SARS-CoV-2 opera mediante un mecanismo biológico a nivel molecular, pero los contagios ocurren fundamentalmente por interacción social, y los riesgos de contagio se distribuyen de manera desigual entre la población. Por ello, el estudio de las interacciones, los contextos y las estructuras sociales resulta crucial para entender las formas de propagación, prevenir los contagios y mitigar los impactos.

Los reportes de investigación, artículos y libros publicados por los científicos

sociales a lo largo de 2020 en torno a la pandemia (incluyendo las conferencias y seminarios para presentar sus análisis e investigaciones) abarcan una muy amplia variedad de temas, enfoques y escalas, pero en general se les puede clasificar de acuerdo con tres tipos de contribuciones.

En primer lugar, la puesta en perspectiva de la pandemia como un hecho no sólo biológico o de salud, sino como un fenómeno social originado y exacerbado por determinadas prácticas y estructuras sociales resultantes de la acción humana sobre la naturaleza y sobre la propia sociedad. Este plano argumentativo corresponde a la tarea fundamental de comprender y explicar los fenómenos sociales mediante las categorías y los conceptos del saber especializado de las ciencias sociales, y se concreta tanto en la dimensión microsociedad como en la sistémica. Desde los primeros meses de la emergencia se han publicado numerosos trabajos que abarcan un amplio espectro temático y de escalas, desde los determinantes de la pandemia en la dinámica de la socioeconomía global, hasta las adaptaciones de la interacción cara a cara como efecto del distanciamiento social (ver, por ejemplo, Hu, 2020; Kapitány-Fövény & Sulyok, 2020; Baldwin & Weder, 2020; Weible *et al.*, 2020; Matthewman & Huppatz, 2020; Collins, 2020).

En segundo lugar, y de manera particularmente imperativa en el contexto de una crisis global como la desencadenada por la pandemia, lo que se espera de la capacidad de comprensión y explicación de cualquier disciplina científica es la posibilidad de generar lineamientos y estrategias de intervención, para apoyar de manera fundamentada la toma de decisiones tanto de los actores públicos como de grupos, organizaciones e individuos. No es una sorpresa constatar que los trabajos publicados con este propósito son menos numerosos que aquellos que se dedican a la reflexión conceptual o al análisis teórico, aunque tampoco es desdeñable su número e importancia. Destacan aquéllos dedicados a la atención a grupos vulnerables específicos, o al desarrollo de recomendaciones puntuales sobre políticas de atención y prevención en contextos específicos, pero también se encuentran propuestas más amplias para la implementación de políticas de protección social que permitan mitigar los impactos de la pandemia y promover un desarrollo sustentable, (ver, por ejemplo, Leslie *et al.*, 2020; Markham, Smith, & Morphy, 2020; Leach, MacGregor, Scoones, & Wilkinson, 2021; Burström & Tao, 2020; Filgueira, Galindo, Giambruno y Blofield, 2020).

Por último, en el contexto de la pandemia se ha multiplicado la

participación de los científicos sociales en los medios de comunicación y en foros no especializados, mediante comunicaciones que buscan incidir en el debate y orientar a un público no especializado, contribuyendo a combatir las teorías de la conspiración y las noticias falsas a partir de información fundamentada. Muy pronto al declararse la pandemia hubo una eclosión de artículos de opinión, reflexiones y notas de divulgación, tanto en medios locales como nacionales e internacionales, incluyendo colaboraciones de algunas de las figuras más influyentes y mediáticas del gremio científico social (para ver artículos publicados por prominentes académicos de la sociología, antropología y economía, consúltese Calhoun, 2020; Taussig, 2020; Krugman 2020).

En mayo de 2020, la revista *Nature Human Behaviour* publicó un artículo titulado «Usos de las ciencias sociales y de la conducta para apoyar la respuesta a la pandemia de COVID-19» (Van Bavel *et. al.* 2020), un trabajo colectivo en el que los autores sistematizan y articulan conocimientos de muy diversas áreas, desde la percepción de riesgo y la influencia del contexto social, hasta el liderazgo y la comunicación de la ciencia, pasando por la toma de decisiones morales, la cooperación y la confianza. El propósito central de dicho artículo fue identificar hallazgos previos que pueden ser utilizados como parte de una respuesta efectiva ante la pandemia, así como aquellos temas en los que se requiere mayor investigación de manera urgente. Ese trabajo, además de sus méritos como artículo científico, es un buen ejemplo de respuesta rápida y rigurosa, desde las ciencias sociales, ante problemas complejos y situaciones de crisis que necesitan respuestas directas y oportunas.

Cuatro meses después, en septiembre de 2020, cuando los estragos de la pandemia eran ya abrumadores en todo el mundo, la revista *Lancet* publicó un informe, preparado por una comisión de expertos creada para apoyar la toma de decisiones de gobiernos, organizaciones civiles e instituciones de las Naciones Unidas, en el que incluyó 10 recomendaciones de políticas públicas para combatir eficazmente la pandemia. Entre estas acciones prioritarias recomendadas por los expertos de la Comisión Lancet, al menos en cuatro de ellas, la comunidad de ciencias sociales ha tenido una presencia muy activa durante dicho período: 1) tomar decisiones basadas en la evidencia científica; 2) generar datos oportunos y consistentes sobre la situación de la pandemia, incluyendo las consecuencias económicas y humanitarias; 3) promover y asegurar la justicia en el acceso a las herramientas de lucha contra la pandemia,

incluyendo pruebas, terapias y vacunas, y 4) proteger a los grupos vulnerables, incluyendo a las personas en pobreza, migrantes, minorías étnicas y raciales, entre otros (Lancet COVID-19 Commission, 2020).¹

Jay Van Bavel y Robb Willer, dos de los participantes en el texto antes mencionado, relatan en una nota posterior el proceso de elaboración de aquel artículo, en el que colaboraron más de 40 autores de cuatro continentes. Además de la amplia, generosa y eficaz colaboración entre colegas de muy diversas instituciones, países y campos de especialidad, enfatizan la velocidad con que el trabajo fue elaborado: «En nuestros campos, los artículos pueden tardar años en redactarse, y las revisiones pueden tardar 6 meses, a menudo iterando en varias rondas. Desde la idea hasta la aceptación, este documento se completó en 29 días (...) En nuestra experiencia, encarna el ideal de cooperación que a menudo falta en la ciencia» (Van Bavel *et al.*, 2020).

La respuesta de algunas comunidades de científicos sociales fue muy rápida. En América Latina, numerosos institutos y facultades de ciencias sociales organizaron eventos y publicaciones sobre el tema, pero sólo en algunos casos destacados se implementó una intervención directa en la elaboración de estudios para apoyar la acción gubernamental de prevención y apoyo a grupos vulnerables. Tal fue el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, y de la Pontificia Universidad Católica de Perú. En México, una de las primeras iniciativas fue la que se desplegó en El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), donde se integró un grupo de trabajo multidisciplinario durante la segunda semana de marzo de 2020, con el objetivo de generar documentos de investigación orientados, en principio, a desarrollar estrategias para la atención a grupos vulnerables.² Durante varios meses, se mantuvo una dinámica de trabajo en la que se elaboraron un total de 10 reportes de investigación, generados en tiempos muy cortos, discutidos en otras tantas sesiones de seminario, y publicados unos días después de su presentación en dicho seminario, luego de que las y los autores incorporaron las observaciones y recomendaciones surgidas de la discusión.

Los primeros dos reportes, sobre los jornaleros migrantes en el norte de México y los albergues para migrantes en la frontera norte del país (incluidos en este libro como capítulos 16 y 17), estuvieron listos en la primera quincena de abril de 2020. Para la difusión de esos trabajos y de todos los contenidos generados a partir de entonces por El Colef en relación con la pandemia, creamos el micrositio Web <https://www.colef.mx/covid19/> que fue habilitado

el 17 de abril, y que resultó una herramienta muy ágil y de amplio alcance. Más allá de las más de 35 mil consultas directas a los documentos publicados, durante los días posteriores a la publicación de cada uno de ellos, la prensa nacional y local utilizó los reportes como fuente para numerosas notas periodísticas, y diversos medios de comunicación, particularmente noticieros de radio de alcance nacional, entrevistaron a los autores para comentar los resultados. De esta manera, los análisis y propuestas generados tuvieron una resonancia pública muy amplia.

Los temas abordados, así como las metodologías y enfoques, abarcan una amplia gama de intereses y reflejan una parte del quehacer de la comunidad académica de El Colegio de la Frontera Norte, pero además, esta experiencia constituye un modelo de trabajo colectivo y de rápida reacción frente a contingencias sociales. En esta ocasión, la integración del grupo obedeció a la urgencia de analizar el impacto de la pandemia en la región norte de México, con énfasis en la zona fronteriza y en los grupos vulnerables, así como proponer medidas para contener la propagación y reducir los riesgos de contagio en grupos específicos. Pero ya en ocasiones previas se había articulado una respuesta semejante, la más reciente con ocasión de las llamadas caravanas migrantes, que arribaron a la frontera norte de México a fines de 2018 y principios de 2019, ante lo cual un grupo interdisciplinario de El Colef realizó una rápida investigación de campo, organizó foros públicos, colaboró con las autoridades encargadas de atender la emergencia, y durante varias semanas actuó como una de las principales fuentes de información para el debate público sobre el tema (Albicker *et al.*, 2019).

Los trabajos reunidos en este libro incluyen nueve de los diez reportes elaborados mediante la dinámica descrita y fueron publicados en versiones más extensas en el micrositio de El Colef días después de su presentación en el seminario. Los otros capítulos fueron expresamente solicitados a sus autoras y autores para complementar el espectro temático de esta publicación y ofrecer un panorama lo más amplio posible en relación con los impactos de la pandemia en la región norte de México.

En la sección I, «La economía, el mercado de trabajo y las empresas», los textos incluidos evalúan diversos impactos económicos de la pandemia durante los primeros meses de la emergencia, principalmente en relación con la caída del comercio mundial y su efecto en la ocupación, en las condiciones de empleo y en las políticas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Una

conclusión que comparten estos trabajos es que las medidas de control sanitario afectaron particularmente a las empresas de la frontera norte de México, por su mayor apertura al mercado mundial y su dependencia del comercio y el turismo transfronterizos.

En el capítulo 1, «El sector externo y la economía en la frontera norte de México», Eliseo Díaz afirma que el cierre parcial de la economía y las restricciones a la movilidad repercutieron en una profunda crisis económica, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, con afectaciones más severas en la frontera norte que en el resto del país, por la disminución del comercio transfronterizo. No obstante, advierte que el impacto económico de la pandemia podría ser contrarrestado en parte por las reglas de origen pactadas en el T-MEC, que podrían generar inversiones masivas de empresas asiáticas, ante la perspectiva de suspender sus exportaciones a Estados Unidos.

En el capítulo 2, «El mercado laboral en México y en la frontera norte», Eduardo Mendoza y Pedro Orraca muestran que la recesión económica generada por la pandemia destruyó empleos en una magnitud sin precedentes en México, provocando desocupación tanto en los mercados formales como en los informales. Los autores sostienen que los crecientes niveles de desocupación incrementarán la pobreza en el país, un pronóstico que fue confirmado posteriormente en noviembre de 2020 por el INEGI, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

De acuerdo con Mendoza y Orraca, la estructura ocupacional de México resultó severamente afectada por la pandemia, con fuertes ajustes tanto en su nivel como en su composición. En cuanto a la región fronteriza del norte del país, el panorama es sombrío, ya que el empleo se concentra en el sector manufacturero ligado a las actividades de exportación y a la industria maquiladora. En general, según se desprende de este capítulo, en México y en la frontera norte se observa una caída sustancial en los niveles de empleo y en las percepciones salariales de la población ocupada.

En el capítulo 3, «La pandemia y el mercado trabajo en México y la frontera norte: una fuerte contracción y un futuro incierto», Alfredo Hualde afirma que, antes de la pandemia, el mercado de trabajo en México ya mostraba un deterioro de las condiciones laborales, visible en el aumento de las tasas de desocupación y en la mayor proporción de empleos de bajos salarios. La emergencia sanitaria agravó estos problemas, y a partir de marzo de 2020 se registró la pérdida de alrededor de un millón de empleos formales, así como

una contracción sustancial del mercado de trabajo, sobre todo en las zonas turísticas y en los estados del norte y el Bajío, es decir, en las regiones donde se concentra la manufactura. En relación con la política gubernamental ante la crisis, el autor afirma que es una prolongación de las políticas, obras y programas de política social iniciados a principios del sexenio, tales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que operan como programas de creación de empleo.

Los capítulos 4 y 5 son resultado de una encuesta coordinada por el Grupo Interinstitucional de Investigación (GIDI), con participación de varios investigadores de El Colef, para evaluar las afectaciones registradas en el empleo, las horas de trabajo y el salario en empresas de varias regiones del país. En el capítulo 4, «Impactos del COVID-19 en las empresas de Baja California», Redi Gomis, Jorge Carrillo y Saúl De los Santos discuten los efectos de las medidas de control sanitario para contener la pandemia en las empresas de Baja California. Por medio de un indicador resumen, los autores encuentran que las más afectadas fueron las empresas pequeñas de ciudades especializadas en actividades turísticas y gastronómicas. Dada la importancia de este tipo de negocios en Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, la afectación fue mayor en éstas que en Tijuana y Mexicali, donde prevalecen las empresas grandes orientadas a la manufactura. Los factores que se combinaron para provocar este resultado fueron el cierre de operaciones no esenciales, el colapso o contracción de la demanda final, las afectaciones en cadena de suministro y las afectaciones complementarias asociadas al cierre de frontera.

En el capítulo 5, «Impactos del COVID-19 en las empresas de Sonora», Álvaro Bracamonte, Redi Gomis y Humberto García presentan resultados de la encuesta del GIDI para el estado de Sonora, los cuales muestran que las empresas más grandes y las dedicadas a las manufacturas tuvieron menos afectaciones que las demás. Otro resultado relevante es que la pandemia ocasionó pérdidas de ingresos en 90% de las empresas encuestadas, muchas de las cuales tuvieron que reducir horas de trabajo, lo que se tradujo en menores ingresos para los trabajadores. Por otra parte, las principales afectaciones en las cadenas de suministros se relacionan con el alza de precios, el cierre de proveedores, la escasez de insumos y las demoras en la entrega. Por sectores, los más afectados son servicios, seguidos por el sector agrícola de exportación y la industria (manufactura vinculada a la maquila, agroindustria y sector automotriz).

En el capítulo 6, «Recuperación productiva y empresarial post COVID-19. Estrategias de apoyo para las MiPyMes en México», Araceli Almaraz advierte que, dada la gravedad de la afectación al tejido productivo, resulta urgente activar políticas de mitigación tales como compensación salarial, diferimiento fiscal, seguro de desempleo, compras públicas, reactivación de cadenas productivas, preparación de emprendedores y otras medidas complementarias para las MiPyMes, que de acuerdo con la autora son las unidades económicas más vulnerables en el contexto de la pandemia. Algunos programas vigentes de apoyo a microempresarios en México favorecen a sectores sociales deprimidos para sostener la demanda, pero se han quedado cortos para compensar los daños sufridos por las MiPyMes. Para avanzar en la construcción de una política más completa, la autora propone una Jornada Nacional de Recuperación Productiva y Empresarial que considere el comportamiento productivo y la evolución empresarial como ejes de los programas y apoyos del Estado, los cuales pueden converger con algunos de los ya existentes.

La sección II, «Interacciones transfronterizas», incluye dos trabajos que abordan el contexto específico de la frontera de México con Estados Unidos, y sus implicaciones para la propagación de los contagios. El gobierno de EE. UU. cerró temporalmente su frontera con nuestro país desde el 20 de marzo de 2020, impidiendo la entrada a mexicanos con visa de turista. En diciembre de 2020, el cierre parcial de la frontera seguía vigente después de sucesivas prórrogas, sin que tal medida fuese replicada por el gobierno mexicano. Así, durante el largo período de cierre parcial de la frontera, los cruces de norte a sur continuaron sin restricción alguna, y en ocasión de algunas festividades nacionales en los Estados Unidos, como el *Memorial Day* (25 de mayo), el Día de la Independencia (4 de julio) y el Día del Trabajo (7 de septiembre), hubo una afluencia masiva de turistas a pesar de la gravedad de la crisis sanitaria en ambos lados de la frontera. Se trata de una más de las expresiones de la asimetría estructural que caracteriza las relaciones transfronterizas. Sin restricciones ni monitoreo sanitario, la afluencia masiva de visitantes significó un relativo alivio para la economía fronteriza del lado mexicano, pero, como muestran los trabajos de esta sección, repercutió en la propagación de los contagios de manera decisiva. Un argumento común en ambos es que la alta prevalencia del COVID-19 en las ciudades fronterizas está relacionada con la intensidad de las interacciones transfronterizas.

En el capítulo 7, «El COVID-19 en la Frontera México-Estados Unidos:

caracterización y análisis estadístico», Alejandro Brugués y Noé A. Fuentes utilizan herramientas estadísticas y de visualización espacial para analizar la evolución y características de la pandemia en las comunidades de la región fronteriza. Encuentran que existe cierta simetría en los focos de contagio a ambos lados de la frontera, lo que permite identificar la interacción fronteriza como un factor asociado a la propagación de la pandemia. No sucede lo mismo con las tasas de letalidad y mortalidad, que dependen menos de dicha interacción que de factores específicos como las condiciones de comorbilidad de la población y de los recursos de salud de cada región. Con base en estos resultados, los autores proponen reforzar la limitación del cruce fronterizo para actividades esenciales con acciones de control epidemiológico en los puntos de cruce. Adicionalmente, consideran importante fortalecer el intercambio de información, la colaboración y el seguimiento binacional de la pandemia, además de incorporar una visión transfronteriza en el diseño de las políticas públicas para el combate al COVID-19.

El capítulo 8, «Las movilidades transfronterizas y el COVID-19: hacia una nueva normalidad en la frontera de México con Estados Unidos», es un trabajo en colaboración de Rocío Barajas y Patricia Radilla. Las autoras analizan la forma en que la pandemia afectó a las poblaciones de las ciudades del noroeste de México con alta movilidad transfronteriza: Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez. Dado que la restricción al cruce fronterizo se aplicó solamente de sur a norte, la alta prevalencia de COVID-19 en las ciudades fronterizas del noroeste de México puede ser atribuida al alto grado de movilidad de personas y mercancías, sin un eficiente protocolo de seguimiento. Para controlar la pandemia, las autoras recomiendan un manejo conjunto del problema entre gobiernos locales de México y Estados Unidos, enfatizando la necesidad de mayor cooperación y coordinación mediante una gobernanza transfronteriza que permita hacer frente a la nueva normalidad que se avecina.

La sección III, «Vulnerabilidad social y desigualdades», incluye seis trabajos que comparten la idea de que el impacto de la pandemia es desigual en los diferentes estratos socioeconómicos, con las mayores afectaciones concentradas en los más bajos. Los capítulos 9 y 10 identifican y ubican en el territorio a los grupos más vulnerables mediante un indicador geoestadístico, con base en la premisa de que una política sanitaria informada con esta clase de datos es más eficaz para combatir la pandemia. Dos capítulos más (11 y 13) abordan los

efectos del confinamiento, que parecen haber agravado las condiciones de habitabilidad de los hogares y recargado en las mujeres las tareas del hogar, además de haber incrementado la violencia doméstica. El resto de los capítulos se dedican a la precarización de las condiciones de trabajo en las maquiladoras, y los efectos de la pandemia sobre la seguridad pública.

En el capítulo 9, «Vulnerabilidad social al COVID-19 en Tijuana, Baja California», Roberto Sánchez, Eduardo Morales, Francisco Lares, Gloria Muñoz, Carlos Vera y Ameyalli Mendías desarrollan un esquema analítico para el estudio de la vulnerabilidad social, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones para romper la cadena de contagios comunitarios. Los autores argumentan que las enfermedades infecciosas emergentes, además de ser problemas médicos, son también problemas sociales, por lo que requieren un análisis cuidadoso de la relación entre el evento infeccioso y las condiciones socioeconómicas de las comunidades para, con base en ello, reducir la transmisión comunitaria y el impacto desigual de la morbilidad y la mortalidad en la población de menores recursos. Mediante la construcción de un índice de vulnerabilidad a escala de área geoadministrativa básica (AGEB) y manzana, los autores establecen un *ranking* de vulnerabilidad que proporciona una definición clara de las zonas en donde las acciones de prevención pueden tener mayor impacto y disminuir las consecuencias negativas de la pandemia en la población con menores recursos. Conviene mencionar que, de hecho, a raíz de la publicación de este trabajo en el micrositio de El Colegio de la Frontera Norte, las autoridades de varios municipios de Baja California solicitaron a los autores del estudio elaborar informes específicos de sus respectivos municipios para desplegar acciones preventivas con base en esta metodología.

En el Capítulo 10, «Mapeando la vulnerabilidad social ante el COVID-19», Lourdes Romo presenta un índice de vulnerabilidad al COVID-19, construido con una metodología diferente a la del capítulo anterior. En este caso, la unidad de análisis es el municipio, y el estudio cubre todo el país. Para construir este índice, la autora consideró cinco componentes: condición sociodemográfica; acceso a bienes y medios para enfrentar la contingencia; recursos laborales; capacidad institucional en el sector salud, y bienestar económico. Los resultados del análisis muestran que las áreas de mayor vulnerabilidad tienden a coincidir con las más afectadas por los contagios de COVID-19. En el caso de la frontera norte, se observa una coincidencia importante entre los municipios que el modelo reportó como de mayor

vulnerabilidad con los de más contagios.

En el capítulo 11, «Habitabilidad en los hogares de Sonora. Repensando el tema durante la pandemia», Rigoberto García analiza los impactos adversos del confinamiento en los hogares. Usando un modelo de habitabilidad de tres dimensiones (espacio habitable, servicios de agua y saneamiento, y servicios de energía), el autor encuentra que la mayoría de los hogares presentan condiciones de habitabilidad mínimamente aceptables, aunque con importantes diferencias. Aplicando una técnica multivariada, el autor identifica cuatro estratos de hogares según su nivel de habitabilidad, encontrando que los efectos de la pandemia afectan en mayor medida a aquéllos con los niveles más bajos. Primero, porque como consecuencia del confinamiento se produce una transferencia *externa-interna* del costo de los servicios que normalmente se utilizan en el trabajo o en la escuela, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de los hogares. En segundo lugar, dicha vulnerabilidad aumenta en los hogares que sufren pobreza energética en algunos de los principales servicios que brinda la energía y, en tercer lugar, el confinamiento profundiza la brecha digital de los hogares, situación que afecta de manera especial a las familias con menores de edad que asisten a la escuela.

En el capítulo 12, «Maquiladoras y trabajadores ante COVID-19: los desencuentros y las limitaciones», Cirila Quintero argumenta que la pandemia tomó por sorpresa a las empresas maquiladoras, a pesar de que las primeras señales del problema que se avecinaba aparecieron desde enero de 2020, al escasear los insumos provenientes de China. Al parecer, los administradores de las maquilas subestimaron los riesgos, y las primeras acciones se tomaron hasta marzo de 2020, cuando la epidemia escalaba en Estados Unidos. A partir de entonces, en sucesivos decretos gubernamentales se ordenó cerrar la operación de las actividades consideradas como no esenciales. Luego se reclasificaron algunas actividades para considerarlas esenciales y, por último, se autorizó la reapertura bajo condiciones poco claras y sin contar con el personal necesario para supervisar su cumplimiento. Para mayor confusión, cada estado aplicó las directrices del gobierno federal de modo diferente. Para los trabajadores, la incertidumbre y discrecionalidad se tradujeron en recortes al salario, o bien significaron laborar en condiciones de alto riesgo, lo que trajo como resultado un gran número de contagios. La autora concluye que para enfrentar una situación de crisis como la ocasionada por la pandemia, es necesario cambiar de perspectiva y no plantear como opciones excluyentes el mantenimiento de

la producción y la protección de los trabajadores.

En el capítulo 13, «Reorganización tempo-espacial del trabajo y las relaciones familiares en los hogares durante la pandemia», Silvia López analiza los efectos de la crisis sanitaria en la organización de la vida cotidiana de las familias, a partir del traslado del trabajo productivo al espacio de los hogares. La autora parte de la premisa de que los efectos de las pandemias y las crisis económicas no son neutrales al género, pues se ha documentado ampliamente que son las mujeres quienes cargan con los mayores costos debido a que en los hogares ellas son mayoritariamente las encargadas de las tareas domésticas, el trabajo de cuidados, y la administración del gasto familiar. En el caso del confinamiento en los hogares debido a la pandemia del COVID-19, el uso de la vivienda para las tareas productivas aumentó la carga de trabajo de las mujeres, además de que provocó un incremento de la violencia doméstica hacia ellas. En este marco, afirma la autora, las políticas públicas que los gobiernos deben formular para apoyar a las familias deben tomar en cuenta las diferencias que persisten en la división sexual del trabajo y que actúan para desventaja de las mujeres en situaciones de trabajo en casa.

El capítulo 14, «Topografías de la violencia criminal. El noreste de México en tiempos de pandemia», de Oscar Misael Hernández y José Andrés Sumano, presenta un panorama de la violencia criminal en el noreste de México (conformado por los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), combinando una aproximación estadística y una fenomenológica. El efecto de la pandemia en la incidencia delictiva y en la violencia, afirman los autores, no ha sido homogéneo a lo largo de la región, pues muestra diferencias asociadas a factores locales tales como las capacidades institucionales de las policías, los controles sociales informales en cada comunidad y el entorno económico específico de las mismas. Por otra parte, la violencia familiar se incrementó en todos los municipios estudiados, si bien la mayoría de los gobiernos locales reaccionaron adecuadamente mediante programas de prevención, reduciendo los niveles iniciales. En cambio, lo que no se modificó fueron los enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades, así como los homicidios por rivalidad delincuencia. La disputa por el control territorial de la frontera se mantiene, con el ingrediente de un creciente exhibicionismo de los grupos criminales en las redes sociales, en lo que constituye una nueva estrategia de comunicación y relaciones públicas masivas.

La sección IV, «Migración y grupos vulnerables», incluye seis capítulos que

se ocupan de diversos grupos de migrantes, incluyendo a los jornaleros agrícolas que trabajan en el noroeste de México, y que ni en los momentos más álgidos de la pandemia y del confinamiento dejaron de trabajar; los solicitantes de asilo atrapados en la frontera mexicana por la suspensión de los procesos de asilo, y los mexicanos y centroamericanos expulsados hacia las ciudades fronterizas mediante procesos de deportación exprés. El elemento en común de estos grupos es su extrema vulnerabilidad, asociada con la precariedad y la falta de protección social, y que entre otras cosas se refleja en las condiciones en que habitan y se trasladan.

En el capítulo 15, «Movilidades e inmovilidades humanas ante el cierre parcial de la frontera México-Estados Unidos», María Dolores París desarrolla una reflexión general sobre las condiciones de espera impuestas por las políticas migratorias, y las medidas en relación con la movilidad transfronteriza tomadas por los gobiernos de México y Estados Unidos. Una de las conclusiones de la autora es que las políticas de bloqueo y devolución de solicitantes de asilo hacia la frontera norte de México han transformado esta región en una sala de espera de las cortes de inmigración de Estados Unidos, generando una situación en la que decenas de miles de personas deportadas de Estados Unidos llegan sin recursos y sin redes de apoyo a la frontera mexicana. Este capítulo esboza el marco general de los trabajos incluidos en la sección, proponiendo tres líneas de análisis: la vulnerabilidad de los migrantes ante las políticas de contención de los gobiernos de ambos países; las condiciones de atrapamiento en el lado mexicano de la frontera, agravadas por la pandemia, y el papel crucial de la sociedad civil en la atención y protección de los derechos humanos de estas poblaciones particularmente vulnerables.

En el capítulo 16, «Los jornaleros agrícolas migrantes y las fuentes de vulnerabilidad en la agroindustria», Laura Velasco sostiene que esta población es altamente vulnerable debido a dos fuentes de riesgo asociadas al modelo de producción agroexportador: las condiciones de traslado de los jornaleros desde sus lugares de residencia y las condiciones de vivienda en los campamentos, ambas caracterizadas por el hacinamiento y la precariedad. De acuerdo con la autora, en los estados del norte de México trabajan más de 200 mil jornaleros, una población que ha crecido en las últimas décadas, a medida que los campos agrícolas de la región se han expandido para atender una creciente demanda de frutas y hortalizas para el mercado de Estados Unidos, y cuyas condiciones laborales se caracterizan por la intensidad del trabajo y la precariedad salarial.

La exposición a los riesgos de contagio derivados de sus condiciones de trabajo, traslado y vivienda, no sólo hacen de estos trabajadores un grupo altamente vulnerable, sino que además evidencian los grandes rezagos estructurales en materia de salud, vivienda y protección laboral que afectan a esta población involucrada en una actividad esencial como la que realizan los jornaleros agrícolas a lo largo del país.

En el capítulo 17, «Migrantes en albergues en las ciudades fronterizas del norte de México», Marie-Laure Coubès, Laura Velasco y Oscar Contreras llevan a cabo un recuento de la infraestructura, localización, dinámica y servicios de los albergues para migrantes en la región fronteriza del norte de México, así como una estimación de la capacidad de los albergues y del número de personas albergadas al inicio del confinamiento. Al analizar las características de la población hospedada, el trabajo centra su atención en las condiciones de vulnerabilidad, relacionadas con las condiciones acumuladas de movilidad precaria, ausencia de vínculos locales y espera incierta. Los autores proponen además algunas líneas de acción relevantes para la mitigación de los riesgos, y una serie de acciones de contención al contagio del COVID-19 entre los migrantes que se encuentran residiendo en albergues.

En el capítulo 18, «Migrantes en Tijuana frente al COVID-19: impactos y consecuencias de las medidas sanitarias desde la perspectiva de los actores», Juan Antonio Del Monte y Robert McKee Irwin presentan los resultados de un estudio en el que analizan las repercusiones de las medidas aplicadas para contener la pandemia en poblaciones migrantes en Tijuana. A partir de testimonios recabados entre defensores de los derechos humanos de migrantes y entre los migrantes mismos, los autores encuentran que dichas medidas han agudizado la precariedad y empeorado las condiciones de vulnerabilidad que históricamente han padecido las poblaciones migrantes en Tijuana, en relación con aspectos como el estatus migratorio, la vivienda, la alimentación y la salud. El Gobierno federal ha retirado el apoyo a los albergues no gubernamentales que están conteniendo la emergencia y, de acuerdo con los autores, ha sido omiso en su obligación de proteger los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

En el capítulo 19, «Migrantes y COVID-19 en el noreste de México», Felipe J. Uribe, Ma. del Socorro Arzaluz y Oscar Misael Hernández analizan las condiciones de vulnerabilidad y las fuentes de riesgo de contagio de los tres tipos de migrantes que transitan por la región noreste de México: mexicanos

deportados, trabajadores con visa H2A, y migrantes centroamericanos, cada uno de esos grupos con riesgos específicos de exposición a la infección por COVID-19. En el caso de los migrantes mexicanos concentrados en centros de detención en Estados Unidos, las deportaciones emprendidas a partir de marzo se realizaron sin mediar filtros sanitarios. Por su parte, debido a la expulsión exprés de migrantes centroamericanos, miles de ellos fueron trasladados a la frontera mexicana y llevados a centros de detención con capacidad insuficiente, en condiciones de hacinamiento. De forma similar, el arribo de migrantes centroamericanos a la frontera durante el confinamiento ocurrió en el marco de la saturación de albergues y las restricciones a la movilidad dentro de las ciudades. Frente a este escenario, afirman los autores, algunas dependencias públicas, así como organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles, desplegaron diversas acciones de apoyo a migrantes en ambos lados de la frontera.

La reacción rápida ante contingencias sociales, enfocada en la intervención para resolver problemas y en colaboración con los actores relevantes, es poco común en el ámbito de las ciencias sociales en México. De la respuesta a la crisis de la pandemia se pueden extraer varias conclusiones importantes, de las cuales aquí sólo se enuncian tres. La primera atañe al potencial del trabajo colectivo para abordar los problemas de investigación con una perspectiva interdisciplinaria, que permita captar la complejidad y la multidimensionalidad de los fenómenos estudiados y, a la vez, derivar recomendaciones viables y oportunas para la acción. A pesar de la persistente declaración de intenciones sobre la intervención para solucionar problemas de la sociedad y de las comunidades, sigue siendo esporádico y poco sistemático el trabajo colectivo e interdisciplinario con fines de intervención. La segunda se refiere al hecho de que, en el marco de una crisis sanitaria que obligó a las y los investigadores a mantenerse en confinamiento por muchos meses, se aceleró de manera extraordinaria del uso de metodologías a distancia, basadas en plataformas virtuales y dispositivos electrónicos, lo que seguramente tendrá amplias repercusiones en las técnicas de investigación social en el futuro cercano. Por otra parte, esta experiencia ha mostrado también algunas de las limitaciones endémicas de nuestras prácticas de investigación, entre ellas la dificultad para plantear los problemas inmediatos y locales en el marco de programas de investigación ambiciosos, teóricamente informados y de largo alcance.

Referencias

- Albicker, S. *et al.* (2019). *La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018. Diagnóstico y propuestas de acción (reporte de investigación)*. El Colegio de la Frontera Norte. Recuperado de: <https://www.colef.mx/wp-content/uploads/2018/12/EL-COLEF-Reporte-CaravanaMigrante-Actualizado.pdf>
- Baldwin, R. & Weder, B. (Eds.) (2020). *Economics in the Time of COVID-19*. London: Centre for Economic Policy Research.
- Burström, B., & Tao, W. (2020). Social determinants of health and inequalities in COVID-19. *European Journal of Public Health*, Volume 30, Issue 4, August, 617–618. doi.org/10.1093/eurpub/ckaa095
- Calhoun, C. (2020). Covid Disaster in America and the World. *Thesis eleven*, October 29. Recuperado de: <https://thesiseleven.com/2020/10/29/covid-disaster-in-america-and-the-world/>
- Cohen, J. (2020). Shots of Hope. *Science*, 18 Dec 2020, Vol. 370, Issue 6523, 1392-1394. doi:10.1126/science.370.6523.1392 Recuperado de <https://vis.sciencemag.org/breakthrough2020/#/finalists/2020-breakthrough-of-the-year>
- Collins, R. (2020). Social distancing as a critical test of the micro-sociology of solidarity. *American Journal of Cultural Sociology* 8, 77–497. <https://doi.org/10.1057/s41290-020-00120-z>
- Filgueira, F., Galindo, L., Giambruno, C. y Blofield, M. (2020). *América Latina ante la crisis del covid-19: vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social*, serie Políticas Sociales, No. 238 (LC/TS.2020/149), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Hu, Y. (2020). Intersecting ethnic and native–migrant inequalities in the economic impact of the COVID-19 pandemic in the UK. *Research in Social Stratification and Mobility*, Vol. 68, August. <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2020.100528>
- Johns Hopkins University of Medicine (2020). *Coronavirus Resource Center*. Recuperado el 21 de diciembre de 2020, de <https://coronavirus.jhu.edu>
- Kapitány-Fövény, M. & Sulyok, M. (2020). Social markers of a pandemic: modeling the association between cultural norms and COVID-19 spread data. *Humanities and Social Sciences Communications* 7, 97. <https://doi.org/10.1057/s41599-020-00590-z>

- Krugman, P. (2020). How America Lost the War on Covid-19. *The York Times*, July 6. Recuperado de: www.nytimes.com/2020/07/06/opinion/covid-19-trump.html?auth=login-google
- Lancet COVID-19 Commission (2020). Lancet COVID-19 Commission Statement on the occasion of the 75th session of the UN General Assembly. *The Lancet*, Vol. 396, No. 10257, October 10. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31927-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31927-9)
- Leach, M., MacGregor, H., Scoones, I. & Wilkinson, A. (2021). Post-pandemic transformations: How and why COVID-19 requires us to rethink development. *World Development*, Volume 138, February, [105233](https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105233). doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105233
- Leslie, M., Fadaak, R., Davies J., Blaak, J., Forest, P., Green, L., & Conly, J. (2020). Integrating the social sciences into the COVID-19 response in Alberta, Canada. *BMJ Global Health* 5: [e002672](https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002672). [doi:10.1136/bmjgh-2020-002672](https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-002672)
- Markham, F., D. Smith, & Morphy, F. (2020) *Indigenous Australians and the covid-19 crisis: perspectives on public policy*. Topical Issue No. 1/2020, Centre for Aboriginal Economic Policy Research, Australian National University, Canberra. doi.org/10.25911/5e8702ec1fba2
- Matthewman, S. & Huppatz, K. (2020). A sociology of Covid-19. *Journal of Sociology* 1–9. doi.org/10.1177/1440783320939416
- Taussig, M. (2020). Would a Shaman Help? *Critical Inquiry*, March 30. Recuperado de: <https://critinq.wordpress.com/2020/03/30/would-a-shaman-help/>
- Van Bavel, J., Baicker, K., Boggio, P., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., Crockett, M., Crum, A., Douglas, K., Druckman, J., Drury, J., Dube, O., Ellemers, N., Finkel, E., Fowler, J., Gelfand, M., Han, S., Haslam, A., Jetten, J., Kitayama, S. *et al.* (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. *Nature Human Behaviour* 4, 460–471. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z>
- Weible, Ch., Nohrstedt, D., Cairney, P., Carter, D., Crow, D., Durnová, A., Heikkila, T., Ingold, K., McConnell, A., & Stone D. (2020). COVID-19 and the policy sciences: initial reactions and perspectives. *Policy Sciences*, 53, 225–241. doi.org/10.1007/s11077-020-09381-4
- Zimmer, C., Corum, J. & Wee, S. (2020). Coronavirus Vaccine Tracker. The New York Times. Recuperado el 31 de diciembre de 2020, de

<https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html>

Notas

¹Las otras seis acciones recomendadas por la Comisión Lancet son: 1) investigar el origen del virus al margen de agendas geopolíticas; 2) desplegar las medidas *no farmacéuticas* que han mostrado su eficacia en la región Asia-Pacífico; 3) asegurar el acceso a financiamiento de emergencia para países en desarrollo, por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; 4) llevar a cabo una reforma financiera global, incluyendo el alivio de la deuda y el diseño de nuevas formas de financiamiento internacional; 5) basar la recuperación económica en un crecimiento impulsado por la inversión pública en tecnologías ecológicas, digitales e incluyentes, y 6) apoyar las instituciones y los esfuerzos de las Naciones Unidas, rechazando cualquier intento por emprender una nueva guerra fría.

²Otra iniciativa fue la del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, que en mayo de 2020 inició un ciclo de conferencias virtuales sobre la pandemia, con un amplio alcance.